

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **EMILSEN DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE ESPINOSA**
Demandado : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**
Litisconsorte
Necesario por pasiva : **LUZ DARY QUIÑONES GARCÍA**
Radicado : **05001 31 05 021 2019 00144 01**
Providencia : Sentencia
: Seguridad Social -Pensión de sobrevivientes causada por muerte de pensionado, reconocida por la entidad de seguridad social en favor de compañera permanente, disputada por cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal.
Temas y Subtemas
Decisión : Revoca Sentencia condenatoria
Sentencia No : 131

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se condene al reconocimiento y pago de **pensión de sobrevivientes** causada por la muerte de su cónyuge Oscar Jairo Espinosa Velásquez, en el porcentaje correspondiente al tiempo de convivencia, con efectos **a partir del día 10 de julio de 2017, intereses moratorios o indexación**, costas procesales, condenas ultra y extra petita.

Hechos relevantes:

Se afirma que el señor Oscar Jairo Espinosa Velásquez falleció el día 10 de julio de 2017, percibía pensión por vejez reconocida por el I.S.S. mediante Resolución No 3789 del 1° de enero de 2002, con efectos a partir del 1° de noviembre de 2001; la demandante y el señor Oscar Jairo contrajeron matrimonio el día 2 de marzo de 1962 y convivieron hasta el año 1992 cuando se dio la separación de hecho, lapso en el que procrearon tres (3) hijas de nombres Gloria Patricia, Adriana María y Yolanda Lucía Espinosa Velásquez, todas mayores de edad; la pareja continuó con una buena relación, comunicación y ayuda mutua hasta el fallecimiento del pensionado; la sociedad conyugal fue disuelta mediante Sentencia del 18 de noviembre de 1998 emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Itagüí, sin que cesaran los efectos civiles del matrimonio. Reclamó pensión de sobrevivientes el día 27 de julio de 2017, siendo negada mediante Resolución SUB 180653 del 31 de agosto de ese año, reconociéndose la convivencia entre 1962 y 1980. En el mismo acto administrativo COLPENSIONES reconoció la prestación económica en un 100% a favor de la señora Luz Dary

Quiñones García, en calidad de compañera permanente, aceptando la convivencia entre ellos desde junio del año 2005 hasta el 10 de julio de 2017.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES a través de apoderada judicial, aceptó lo referente a la calidad de pensionado del causante, el matrimonio contraído con la demandante, la disolución de la sociedad conyugal, la reclamación de la pensión de sobrevivientes, la respuesta negativa y el reconocimiento en favor de la señora Quiñonez García; frente a lo demás expuso que no le consta. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, innominada, descuentos del retroactivo por salud.

Por su parte, el apoderado de la señora **LUZ DARY QUIÑONES GARCÍA** admitió los mismos hechos que COLPENSIONES, afirmando que la convivencia entre la demandante y el señor Oscar Jairo se dio desde el matrimonio hasta antes del año 1977, cuando inició con la señora Mireya Gómez Montoya por algún tiempo y luego con la señora Luz Dary con quien hizo vida marital durante los últimos doce (12) años de su vida; niega que existiera colaboración, ya que la señora Emilsen demandó al pensionado en varias ocasiones reclamando alimentos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito** de Medellín,

declaró que a la demandante EMILSEN DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE ESPINOSA, le asiste derecho a la sustitución pensional por la muerte de su cónyuge ÓSCAR JAIRO ESPINOSA VELÁSQUEZ, en un porcentaje del **55,7%** de la mesada pensional y consecuentemente en ese mismo porcentaje se le debe **reducir a la señora LUZ DARY QUIÑÓNEZ GARCÍA, quien continuará percibiendo el 44,3%**; condenó a COLPENSIONES a reconocer el porcentaje de la mesada pensional a partir de la nómina de septiembre de 2021 que se paga en octubre del mismo año, **dejando retenidas dichas sumas hasta cuando alcance ejecutoria la sentencia o sea revocada**; COLPENSIONES pagará a la demandante o a la señora LUZ DARY QUIÑONES GARCÍA, el retroactivo de las mesadas pensionales retenidas cuando la sentencia alcance ejecutoria, según sea confirmada o revocada, debidamente indexadas; autorizó descuentos de los aportes con destino al Sistema de Salud. Declaró probada la excepción de improcedencia de intereses moratorios. Impuso costas a cargo de COLPENSIONES, agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en favor de la demandante.

Recursos de Apelación:

El apoderado de la señora **Luz Dary Quiñones García** solicita se revoque la condena al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante Emilsen, toda vez que **el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, exige a la cónyuge tener sociedad conyugal vigente, la cual fue disuelta y liquidada por la separación de bienes.** En caso de no acogerse este planteamiento y de considerarse que ambas señoras tienen derecho

a la pensión de sobrevivientes, debe tenerse en cuenta la convivencia entre la señora Luz Dary y el fallecido, entre los años 2005 y 2017, según el testimonio de los señores López y Oscar Espinosa, relación que habían iniciado desde antes, habiendo lugar a modificar el porcentaje asignado.

La apoderada de **COLPENSIONES** sostiene que no hay controversia respecto a que la demandante tuvo tres hijas con el causante, actualmente mayores de edad; expone que la entidad se basa en el resultado de la investigación administrativa, **sin que se demostrara la convivencia** para acceder a la pensión de sobrevivientes; solicita se revise la prueba testimonial y documental, en aras de verificar que se cumplen los requisitos legales para acceder al derecho en los porcentajes asignados, debiéndose **revocar la Sentencia de Primera Instancia**.

No se allegaron alegatos de conclusión.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **apelación** y se conocerá también en **Consulta** en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo

establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia AL2912 del 11 de julio de 2018 Radicación 68716, AL469 del 3 de febrero de 2016 Radicado 71896, STL-7382 del 9 de junio de 2015 Radicado 40200, M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si la demandante Emilsen del Socorro Vásquez de Espinosa, quien reclama en calidad de cónyuge supérstite con separación de hecho, liquidación de sociedad conyugal y vínculo matrimonial vigente, tiene derecho a un porcentaje de la pensión de sobrevivientes, reconocida por COLPENSIONES con el 100% en favor de la señora Luz Dary Quiñones García en calidad de compañera permanente; en caso afirmativo, se revisará si procede modificar los porcentajes de distribución del derecho pensional, en proporción al tiempo de convivencia. Se conocerá en Consulta en favor de COLPENSIONES respecto de las demás condenas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

No es objeto de discusión en esta segunda instancia, que el señor Oscar Jairo Espinosa Velásquez falleció el día 10 de

julio de 2017 en el Municipio de Itagüí – Antioquia (fl 17 archivo 02); percibía pensión de vejez reconocida por el I.S.S. mediante Resolución No 003789 del 18 de marzo de 2002, con efectos a partir del 1° de noviembre de 2001, en cuantía de \$963.421 para ese año (fl 15 archivo 16); **la señora Emilsen del Socorro y el señor Oscar Jairo contrajeron matrimonio católico el día 2 de marzo de 1962** en Medellín, según registro civil obrante a folio 2 archivo 02, el cual carece de nota sobre cesación de efectos civiles; **mediante Sentencia de fecha 18 de noviembre de 1998 emitida por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Itagüí, se decretó la separación definitiva de bienes de los cónyuges, ordenándose su liquidación** e inscripción en el registro civil de matrimonio (fls 36 a 46 archivo 02).

La señora Emilsen del Socorro reclamó pensión de sobrevivientes el día 27 de julio de 2017 y la señora Luz Dary Quiñones García hizo lo propio el día 24 de julio del mismo año; solicitudes que fueron resueltas por **COLPENSIONES** mediante la Resolución SUB 180653 del 31 de agosto de 2017, en la cual **reconoció el 100% del derecho a la sustitución pensional en favor de la señora Quiñones García, en calidad de compañera permanente**, por haber convivido con el causante entre **junio de 2005 y el 10 de julio de 2017**, prestación económica con carácter vitalicio a partir del 10 de julio de 2017, con una mesada en cuantía de \$2.073.377. **Negó el derecho a la señora Emilsen por no acreditar la calidad de beneficiaria, al no haber convivido con el causante los últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento**, ni tener sociedad conyugal vigente, concluyendo que la convivencia se dio entre los años **1962 y 1980**.

Frente a los temas objeto de apelación tenemos que:

El apoderado de la señora Luz Dary Quiñones García solicita se revoque la condena al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante Emilsen del Socorro, por cuanto el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 exige a la cónyuge tener sociedad conyugal vigente, la cual fue disuelta y liquidada. Al respecto encontramos que:

El Juez de Primera Instancia explicó que la normatividad aplicable es confusa, prestándose a diversas interpretaciones y que, si bien es cierto, el inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 habla de sociedad conyugal vigente, la H. Corte Suprema de Justicia se ha encargado de definir el tema, orientado a que lo prevalente es que se mantenga vigente el vínculo matrimonial.

En el caso particular, al haber fallecido el causante señor Oscar Jairo el día 10 de julio de 2017, existiendo reclamación conjunta de la demandante en calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal y de la señora Luz Dary como compañera permanente, pero sin convivencia simultánea, **la normatividad aplicable es el inciso 3° del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993**, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, veamos:

*“...<Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del*

causante. **La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; ...** (Negritas fuera de texto).

La expresión “con la cual existe la sociedad conyugal vigente” fue declarada exequible por la **H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-515-19 de 29 de octubre de 2019**, al estudiar una demanda donde se afirmaba que la norma vulneraba el derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al establecer como requisito para el reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes, que el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta. Frente a lo anterior, la Sala Plena de la H. Corte Constitucional² indicó que los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal vigente están en situaciones diferentes, por lo cual, no son sujetos de tratamiento igual; explicando que **cuando se disuelve la sociedad conyugal, se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial y ello sumado a la separación de hecho de la pareja, conlleva a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos para derivar de allí la calidad de beneficiario**; veamos:

“...Por un lado, **el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial**. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, **los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan**. Por otro lado, **en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario...**”.

² Aclaración de voto Magistrada Diana Fajardo Rivera, salvamento de voto Magistrada Cristina Pardo Schlesinger

Así mismo, señaló que “...el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso...”. Citó también el artículo 1871 del Código Civil, según el cual, la sociedad conyugal se integra por dos tipos de haberes: el absoluto y el haber relativo y en el primero se incluyen las “pensiones”, salarios, honorarios, prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas y en consecuencia “...Luego, **cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda...**” (Negritas fuera de texto).

Con relación al propósito o el objeto de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes, es pertinente recordar que busca brindar protección a los miembros del grupo familiar del pensionado fallecido, quienes ante la ausencia de aquél, verían afectado su sostenimiento y la atención de sus necesidades básicas, al verse desprovistos del apoyo económico que en vida les brindada el causante.

Al respecto, la H. Corte Constitucional en **Sentencia C-1094 de 2003**, al estudiar la exequibilidad de varios artículos de la Ley 797 de 2003, indicó que “...**La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia** como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que **las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus**

necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, **la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades...** (Negritas fuera de texto).

Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia con Radicación 10406 del 17 de abril de 1998, indicó que “...no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la institución de **la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición...**”; criterio rememorado en SL4097-2021, al señalar “...bien vale la pena memorar que **la finalidad de la pensión de sobrevivientes es procurar el alivio al que se ve sometida la familia ante el desaparecimiento de un miembro de su núcleo**, en la medida en que se ve desprovista de aquello que le brindaba y que coadyuvaba a su congrua subsistencia...” (Negritas fuera de texto).

Acerca de quiénes conformar el grupo familiar, la Sala de Casación Laboral en Sentencia con Radicación 38113 del 27 de octubre de 2010, explicó que “...**El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento emocional y social**, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar común...”.

Es de anotarse que con la anterior referencia, no se pretende hacer alusión a mantener el denominado *vínculo actuante*,

cuando media una separación de hecho entre cónyuges que mantienen el vínculo matrimonial; sino que la intención es mostrar que, el propósito del Sistema de Seguridad Social Integral y en específico de la pensión de sobrevivientes, es brindar protección a aquellas personas que para la época de la muerte, conformaban el grupo familiar del pensionado o afiliado fallecido o en determinados casos, que lo fueron en tiempo anterior, manteniendo el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal.

Distinta es la situación que se presenta en casos como el presente, donde además de la separación de hecho que se ha mantenido durante muchos años, tampoco se mantuvo un vínculo económico, pues la pareja decidió liquidar también la sociedad conyugal; lo que muestra ausencia de lazos afectivos y económicos y en tales circunstancias, no tiene cabida invocar la calidad de miembro del grupo familiar del causante, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Además, su otorgamiento en este contexto, podría implicar afectación a derechos legalmente constituidos, en favor de quien viene percibiendo ese derecho, por haber acreditado la calidad de miembro del grupo familiar, como compañero (a) permanente, brindando ayuda, apoyo, acompañamiento, para la época de la muerte del causante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de Decisión Laboral encuentra que le asiste razón al apoderado de la señora Luz Dary Quiñones, ya que, al haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal conformada por la señora Emilsen del Socorro y el causante, no se cumple con el presupuesto normativo consagrado en el inciso final del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,

según el cual, “...**La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente...**”, norma declarada exequible por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-515 de 2019.

No desconoce esta Sala de Decisión Laboral, que la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, en Sentencias SL5169-2019, SL359-2021, SL1476-2021, SL3251-2021, ha reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes, pese a haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal, señalando que “...*la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial...*” (SL3251-2021).

Por su parte, la **H. Corte Constitucional en la Sentencia SU 298 de 2015, en los eventos en que existen dos precedentes, uno de la jurisdicción especializada y otro de la constitucional, advirtió** que “...**es el precedente constitucional**, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, **el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones**. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no sólo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional...” (Negritas fuera de texto). De igual forma, en la Sentencia **T-109 de 2019**, la Corte precisó que el precedente constitucional tiene “...carácter **vinculante**, no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la

Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte...”. Por su parte, en Sentencia **SU354-2017** señaló que “...**los fallos emitidos por la Corte irradian dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho**; por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son inter partes. No obstante, existe un punto de encuentro y es que ambos fallos se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior, sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados...” (Negritas fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, **esta Sala de Decisión Laboral acoge el criterio de la H. Corte Constitucional**, respecto a la exigencia de acreditar **la sociedad conyugal vigente**, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, **cuando se reclama en calidad de cónyuge supérstite y existía además separación de hecho**; requisito que no se cumple en el asunto bajo estudio.

Por sustracción de materia no hay lugar a revisar los demás temas objeto de apelación o en Consulta.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **revocar** la Sentencia de Primera Instancia; en su lugar, **se absolverá a COLPENSIONES y a la señora LUZ DARY QUIÑONES GARCÍA**, de las pretensiones formuladas en su contra por señora **EMILSEN DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE ESPINOSA**.

COSTAS:

Se revocará la condena en Costas de Primera Instancia impuesta a COLPENSIONES. Sin condena en Costas en ninguna de las instancias, teniendo en cuenta que se adopta la decisión en aplicación de Sentencia de Constitucionalidad proferida por la H. Corte Constitucional, estando el trámite el proceso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** se revisa y en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor de COLPENSIONES; en su lugar, se **ABSUELVE a COLPENSIONES y a la señora LUZ DARY QUIÑONES GARCÍA**, de las pretensiones formuladas en su contra por señora **EMILSEN DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE ESPINOSA**; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: Se **revoca la condena en Costas impuesta en Primera Instancia** a cargo de COLPENSIONES, en su lugar, se

absuelve por este concepto. **Sin condena en Costas en ninguna de las instancias**, según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Con salvamento de voto



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: EMILSEN DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE ESPINOSA
Demandado	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Litisconsorte	
Necesario por pasiva	: LUZ DARY QUIÑONES GARCÍA
Radicado	: 05001 31 05 021 2019 00144 01
Providencia	: Sentencia
	: Seguridad Social -Pensión de sobrevivientes causada por muerte de pensionado, reconocida por la entidad de seguridad social en favor de compañera permanente, disputada por cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal.
Temas y Subtemas	
Decisión	: Revoca Sentencia condenatoria
Sentencia No	: 131

FECHA SENTENCIA: 28 de junio de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy viernes 30 de junio de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy viernes 30 de junio de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto que debe imperar en este tipo de asuntos, me aparto de la decisión tomada por la Sala al resolver el recurso de apelación propuesto por **la señora Luz Dary Quiñones García**, contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso que promovió **Emilsen del Socorro Vásquez de Espinosa**, en calidad de cónyuge supérstite, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y al que fue vinculada la recurrente como litisconsorte necesario.

En efecto, como se dejó plasmado en la providencia de la que me separo, la primera instancia dispuso que ambas personas eran beneficiarias de la pensión de sobreviviente y la distribuyó entre ellas a prorrata del tiempo convivido, *«**declaró que a la demandante EMILSEN DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE ESPINOSA, le asiste derecho a la sustitución pensional por la muerte de su cónyuge ÓSCAR JAIRO ESPINOSA VELÁSQUEZ, en un porcentaje del 55,7% de la mesada pensional y consecuentemente en ese mismo porcentaje se le debe reducir a la señora LUZ DARY QUIÑÓNEZ GARCÍA, quien continuará percibiendo el 44,3%»***; para la recurrente, con esa decisión el juzgador incurrió en una interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, literal b aparte final, en cuanto su aplicación **exige a la cónyuge tener sociedad conyugal vigente, la cual fue disuelta y liquidada por la separación de bienes**.

Desde esa perspectiva la Sala **acogió** la interpretación que la Corte Constitucional hizo en la sentencia C-515-2019 del apartado final del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, de ella concluyó que la cónyuge supérstite del causante, no divorciada, no tiene el derecho a percibir una porción de la pensión de sobrevivientes, al haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, **y revocó la sentencia de primer grado, su lugar absolvió a Colpensiones y a Luz Dary Quiñones García de las pretensiones elevadas por Emilsen del Socorro Vásquez de Espinosa**.

Conforme se explica a continuación, la exégesis que la Sala mayoritaria adoptó para los eventos en que *«no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho»*, dista de la interpretación que la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene sobre este mismo precepto, pues en el entendimiento de esa corte, en tal supuesto la vigencia de la sociedad conyugal no resulta necesaria para que el cónyuge separado de hecho tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, sino que para tales efectos basta la existencia de la unión matrimonial, por lo que, transpolando esta regla al asunto bajo examen, la cónyuge separada de hecho, con vínculo matrimonial vigente, y con sociedad conyugal disuelta, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, si acredita una convivencia mínima de 5 años con el causante, en cualquier tiempo.

La aludida concepción responde a la consideración de que las interpretaciones normativas que realicen las instituciones y los jueces, deben atender, primordialmente, dos principios, (i) el de universalidad, de orden constitucional y legal; así, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social es universal en la medida que dispensa una protección, por igual, a todas las personas, y: (ii) pro homine, en cuya virtud el intérprete debe acoger el sentido más extensivo de un texto normativo, cuando se trata de la realización y efectivización de derechos fundamentales.

En efecto, la mencionada norma establece:

ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

[...]

b) [...]

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. **La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;** [...]. (énfasis añadido).

Esta interpretación fue reiterada en la sentencia CSJ SL 1180 -2022 , rad. 87811 MP. Iván Mauricio Lenis, en la que la sustitución de la pensión era disputada por una cónyuge no divorciada, separada de hecho y sociedad conyugal disuelta, con una compañera permanente que alegaba la convivencia efectiva con el pensionado por más de cinco años anteriores a la muerte de aquel y el derecho exclusivamente en su favor. Este asunto, por contener supuestos fácticos y jurídicos similares al que ocupa

la atención de la sala, constituye una regla de decisión que debió ser atendida en esta oportunidad.

Una mirada a las decisiones que allí se estudiaron dan cuenta de que, la primera instancia distribuyó la pensión entre ambas beneficiarias, y la segunda instancia, con sustento en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la jurisprudencia de la corte y en las pruebas que analizó, expresó *«las obligaciones personales derivadas del matrimonio se mantienen en vigencia del contrato matrimonial, dado que es el que confiere derechos y asigna obligaciones a los consortes y, en consecuencia, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar»*, una vez señaló esto, dispuso que ambas reclamantes acreditaron los requisitos legales para ser beneficiarias de la prestación deprecada, porque *«después de la separación de cuerpos, entre los esposos se mantuvo el apoyo como pareja»*.

Al resolver el recurso de casación interpuesto por la compañera permanente quien con fundamento en la interpretación hecha por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-515-2019, acusó a la sentencia del tribunal de haber interpretado erróneamente el inciso 3º del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la cónyuge perdió el beneficio por cuenta de la inexistencia de la sociedad conyugal, la Corte se planteó que debía *«determinar si el ad quem erró al otorgarle en forma proporcional la pensión de sobrevivientes a la demandante en su condición de cónyuge supérstite, pese a que la sociedad conyugal con el causante fue disuelta y liquidada»* y al momento de solucionar ese problema jurídico expuso:

Pues bien, la Corte en diferentes oportunidades ha señalado que si bien la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial, como equivocadamente lo entiende la recurrente, pues aquel continúa vigente hasta tanto se declare su nulidad o se presente una de las causas de disolución previstas en el artículo 152 del Código Civil, norma que establece que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado, mientras que el religioso por el decreto de la cesación de sus efectos civiles y, además, por los cánones y normas correspondientes al ordenamiento religioso (CSJ SL3251-2021).

Bajo este contexto, es evidente que la disposición con la que se resuelve el presente caso es la contenida en el inciso 3º del literal b) de la Ley 797 de 2003, como acertadamente lo hizo el Tribunal, **y de cuya interpretación no se advierte ningún yerro, en tanto se acompasa con el criterio fijado por esta Corporación en el sentido de que la cónyuge separada de hecho pero con vínculo matrimonial vigente, aun hallándose disuelta la sociedad conyugal, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes si acredita una convivencia mínima de 5 años con el causante en cualquier tiempo, en vigencia del vínculo matrimonial.**

Precisamente esa es la intelección que la Sala le ha dado a dicha preceptiva, entre otras, en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ SL1869-2020, CSJ SL2232-2019, CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1399-2018,

En la providencia aludida, la corporación reiteró las razones que ofreció en la CSJ SL1399-2018 para sostener que el cónyuge separado de hecho tiene derecho a

percibir la pensión si el vínculo matrimonial está vigente, de modo que, «*otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho*».

Por el contrario, en el caso que es objeto de nuestra atención, la Sala por mayoría, a pesar de evidenciar la existencia de un precedente uniforme en la Sala de Casación Laboral **negó el otorgamiento de la prestación por el solo hecho de que la sociedad conyugal está disuelta, aunque existía el verdadero vínculo jurídico**; pues bien, *en mi concepto*, la interpretación que la Corte Suprema viene haciendo está acorde con los artículos 42 y 48 de la Carta Política, de acuerdo con los cuales la pensión de sobrevivientes es una prestación derivada de la seguridad social, por lo tanto, respeta la voluntad del legislador de proteger la “*unión conyugal*”, lo cual se traduce en la necesidad de conceder la prestación al(la) cónyuge beneficiario (a) siempre que subsista del vínculo matrimonial y demuestre la convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo.

En cuanto al mismo asunto, en las sentencias CSJ SL1399-2018, reiterada en CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1869-2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema insistió en la interpretación que hizo en la **SL, 13 mar. 2012, rad. 45038** sobre el conflicto o contradicción que se presenta entre los conceptos de “*unión conyugal*» a que se refiere el inciso 2º del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 con el de “*sociedad anterior conyugal*», del inciso 3º *ibid.*:

En efecto, la antinomia contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, visible cuando en su inciso 2.º hace referencia a «sociedad anterior conyugal» y, en el tercero, a «unión conyugal», fue resuelta por la Corte a favor de la última a través de sentencia SL, 13 mar. 2012, rad. 45038, en los siguientes términos:

El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la “unión conyugal” y la restante con la de la “sociedad conyugal vigente”. Estima la Sala, que si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel.

Esa distinción, en eventos como el aquí se discute es de especial interés, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la obligación de socorro y ayuda mutua, que están plasmados en el artículo 176 del Código Civil que dispone que “los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”, y en el propio artículo 152, modificado por el artículo 5 de la Ley 25 de 1992, prevé que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado.

Así, por ejemplo, en sentencia C-533 de 2000, la Corte Constitucional abordó la naturaleza del matrimonio, y en torno al punto que aquí interesa estimó:

“(…) el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas (...) En el matrimonio (...) las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse

por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.

Por demás, es el propio artículo 42 de la Constitución Política el que señala que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y si a ello se suma la voluntad del legislador de proteger la “unión conyugal” a la que hizo referencia la norma que aquí se discute, no sería propio negar el otorgamiento de la prestación cuando la sociedad conyugal esté disuelta, pero exista el verdadero vínculo jurídico, máxime cuando en este evento, el propio Ramón Antonio Castrillón Uribe, en desarrollo de sus obligaciones de socorro y ayuda mutua, previó el tema pensional e incorporó en la cláusula atrás transcrita su deseo de prodigar amparo, a quien convivió con él por más de 20 años.

La anterior interpretación la ratifica la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que, a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y respeto a la personalidad del cónyuge, los cuales subsisten mientras el vínculo no sea disuelto por muerte, divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la unión. Por lo tanto, el primero de los conceptos posee un significado subjetivo e intrínseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes.

Al compás de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos, sino más bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta unión la que confiere derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar.

Pero tampoco resulta acertado enervar el derecho pensional ante figuras tales como la separación de hecho o de cuerpos, toda vez que en la primera de estas situaciones la obligación de convivir subsiste y en la segunda tan solo se excluye la de cohabitación, pero no la de socorro y ayuda mutua que, pese a esas circunstancias, subsiste.

Para decirlo de otro modo, la separación de cuerpos, figura jurídica en virtud de la cual solo se extingue el deber de cohabitación, no es un obstáculo para que el consorte que haya convivido durante 5 años con el causante acceda a la prestación. Así mismo, la separación de hecho tampoco frustra este derecho, pues esta circunstancia fáctica no extingue de suyo los deberes recíprocos de los cónyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el vínculo matrimonial.

Ello explica por qué, para el legislador del 2003 a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, es decir, de la cesación de la comunidad de vida, si alcanzan a convivir al menos 5 años, el supérstite puede adquirir la pensión de sobrevivientes mientras ese vínculo no se disuelva, ya que los deberes de la pareja subsisten, al margen de si se allanaron a ellos o no.

Así las cosas, en resumen, el cónyuge con unión marital vigente, separado o no de hecho, que haya convivido en cualquier tiempo durante un lapso no inferior a 5 años con el afiliado o pensionado fallecido, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes.

Las anteriores reglas han sido empleadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la especialidad laboral, para fallar los casos en los que se plantean supuestos de hecho y de derecho similares a los propuestos en esta oportunidad, aún en vigencia de la sentencia CC C-515 de 2019 y, por lo tanto, corresponde al precedente vertical vinculante para proferir decisiones futuras en casos semejantes, pues es justamente a los jueces ordinarios a quien corresponde determinar el sentido de las disposiciones legales, de ahí que la constitución y la ley conceda a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la función de unificación de la jurisprudencia tarea implícita en las atribuciones concedidas como tribunal de casación.

Decimos esto porque el carácter vinculante de estas reglas o subreglas de derecho, encuentra su fundamento en la salvaguardia de los principios de igualdad material y seguridad jurídica, y en que los ciudadanos tienen derecho a que las causas que someten a la decisión judicial se resuelvan con base en la interpretación uniforme del órgano de cierre.

No se pierda de vista que en la sentencia SU 354-2017 la Corte Constitucional insistió en que el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a la de «*las Altas Cortes*». En la sentencia C-335 de 2008, se refirió a las decisiones de todos los órganos de cierre jurisdiccional y reiteró el carácter vinculante de su jurisprudencia, en los siguientes términos:

Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redundará en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. **Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares**".

De manera similar se pronunció la guardiana de la constitución en la sentencia C-816 de 2011, al sostener que la fuerza vinculante del precedente de las Altas Cortes surge de su definición constitucional como órganos de cierre, "*condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones*".

También es cierto, como se indica en la providencia mayoritaria, que la Corte Constitucional en la sentencia SU298 de 2015 señaló que es el precedente constitucional el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones, pero en ese punto no es posible dejar de lado la regla de igualdad prevista en el artículo 13 de la carta política, que de acuerdo con el artículo 85 ibidem es de aplicación inmediata, de tal manera que toda situación en la que se evidencie un trato diferenciado en decisiones judiciales, transgrede aquel principio; se dice lo anterior porque las situaciones fácticas que rodearon el presente asunto acontecieron antes de proferirse la sentencia C-515 de 2019 aspecto temporal que no se tuvo en cuenta en el cambio de interpretación propugnado en la decisión de la cual me distancio.

En efecto en la sentencia SU460 de 2016, la Corte Constitucional analizó el problema de los efectos en el tiempo de los cambios de postura jurisprudencial y aseguró que es necesario restringir sus efectos solo a las decisiones futuras para no vulnerar el debido proceso, así consideró necesario verificar si la aplicación inmediata

de la nueva interpretación puede generar una afectación ostensible a quienes acudieron a la administración de justicia con fundamento en las reglas establecidas en la jurisprudencia vigente y que posteriormente fueron modificadas, como sucede en el caso que se analizó por la Sala:

(...) la aplicación de la jurisprudencia que define sobre las reglas del proceso judicial está supeditada a un examen fáctico que permita determinar si su inmediata aplicación significa una afectación ostensible y transcendental de un derecho fundamental de los sujetos procesales, quienes en virtud de la confianza legítima, accedieron a la administración de justicia con fundamento en las reglas establecidas por la jurisprudencia vigente, y estas reglas, posteriormente, fueron modificadas por un precedente que resulta determinante para producir una afectación iusfundamental. Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien la regla general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones, la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir su decisión, debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta procesal de las partes.

Precisamente la sentencia de la que me separo se abstuvo de considerar los efectos que posiblemente pudiera ocasionar la aplicación inmediata de la interpretación contenida en la sentencia CC C-515 de 2019, atendiendo a que lo debatido es el derecho fundamental a la pensión de sobrevivientes.

Por último, como lo enfatizó el voto disidente de la magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER a la sentencia C-515 de 2019, **«2. Los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal vigente se encuentran en la misma circunstancia desde la perspectiva del matrimonio y la seguridad social»**, toda vez que la separación de hecho no extingue los derechos y obligaciones personales del matrimonio continúan vigentes sin importar si los cónyuges separados de hecho mantienen o no vigente la sociedad conyugal, y ello encuentra su razón de ser en que como allí se dijo *«el Sistema de Seguridad Social en Pensiones y el régimen patrimonial del matrimonio obedecen a lógicas diferentes. (...) Por ello, al tratarse de figuras disímiles, no es congruente con la protección del derecho fundamental a la seguridad social exigir al cónyuge sobreviviente la vigencia de los efectos patrimoniales del matrimonio para acceder al amparo de las prestaciones pensionales»*, mucho menos si se entiende que *«los derechos pensionales se van construyendo con los aportes a la seguridad social que hacen las personas a lo largo de su vida»*.

Sala Laboral Tribunal Superior de Medellín
Radicado: 05001 31 05 021 2019 00144 01
Demandante: Emilsen Del Socorro Vásquez De Espinosa
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Litisconsorte Necesario Por Pasiva: Luz Dary Quiñones García

Fecha ut supra,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO